

Contenido

PRESENTACIÓN.....	2
OBJETIVO.....	4
MARCO JURÍDICO	5
ROLES	7
GLOSARIO	8
PROCEDIMIENTO.....	11
I. Concepto y Principios sobre el Uso Legítimo de la Fuerza.....	11
1. Concepto de Uso de la Fuerza.....	11
a) Niveles de resistencia.....	12
b) Niveles del uso de la fuerza	12
2. Uso indebido de la fuerza.....	14
a) Acciones que constituyen uso indebido de la fuerza.....	15
III. Plan operativo de uso de la fuerza	16
1. Informes sobre el uso de la fuerza	16
2. Autoridades a quien se dirigen las reglas del uso de la fuerza.....	17
3. Consideraciones en la limitación a la libertad personal	17
4. Aspectos generales.....	19
a) Notificación a la estación o base operativa	19
b) Acciones previas.....	19
c) Acciones posteriores	20
IV. Procedimientos específicos.....	20
1. Metodología ante la orden de aprehensión, por parte del o los elementos de la policía ...	20
2. Seguridad en la Sala de Audiencia	24
3. Traslados de detenido	25
4. Medidas Cautelares	25
V. Responsabilidades.....	27
1. Responsabilidades específicas.....	27
a) Obligaciones de los mandos.....	27
b) Acciones u omisiones que dan lugar a la determinación de responsabilidad legal para los mandos.....	28

PRESENTACIÓN

El 18 de junio de 2008 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que modificó los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73 fracciones XXI y XXIII, 115 fracción VII y 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad y justicia penal.

El objeto de esta reforma es lograr un Sistema de Justicia Penal de corte acusatorio y oral; con el cual, el acceso a la justicia será más transparente, ágil y equitativo, y al mismo tiempo, mejorar todas las instituciones de seguridad pública y de justicia penal; para que, conjugando estos elementos, se pueda lograr certeza jurídica para todos los habitantes del país.

Para alcanzar con éxito la implantación de la reforma, el 13 de octubre de 2008, se creó el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; mismo que, a través de la Secretaría Técnica, proporciona apoyo a la Federación y a las Entidades Federativas, cuando así lo solicitan, para la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal, con pleno respeto a las atribuciones de los Poderes Federales, la soberanía de los Estados y del Distrito Federal y la autonomía municipal, así como de las instituciones y autoridades, que intervengan en la instancia de coordinación.

Uno de los logros más importantes del Estado Mexicano, fue el obtener un Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del año 2014; dicho Código es un instrumento normativo, que permite implementar el sistema penal acusatorio, de manera armónica y uniforme en el país; ya que, en cualquier parte del territorio nacional se estará aplicando la misma legislación, asegurando el debido proceso y el respeto irrestricto a los derechos humanos de la víctima u ofendido y del imputado.

El artículo Décimo Primero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la necesidad de contar con protocolos de actuación del personal sustantivo; por lo que, el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, a través de su Secretaría Técnica, en coordinación con las instituciones operadoras del nuevo sistema de justicia penal, ha

elaborado el presente modelo de protocolo, con la finalidad de que los criterios jurídicos que habrán de observarse en el procedimiento penal se unifiquen en todos sus aspectos, y evitar así, que en cada entidad federativa, haya distintas formas de interpretación del articulado del Código Nacional de Procedimientos Penales; es decir, que exista plena homologación en las herramientas de apoyo en las distintas instituciones, para la tramitación del procedimiento penal.

El presente instrumento es orientador y se encuentra basado en la estructura planteada por el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en las buenas prácticas de diversas instituciones; en síntesis, se trata de un Protocolo conceptual y referencial, mas no de un manual operativo, pues el objetivo, es que se conozca la estructura y los límites de las actuaciones de los diversos operadores del Sistema, para estar en posibilidad de llevar a cabo dicho procedimiento, en la medida que se adopte por las circunstancias específicas de cada entidad federativa.

Finalmente, se pone a consideración de las diversas instituciones operadoras del Sistema Penal Acusatorio de cada uno de los Estados el presente protocolo, con la finalidad de que pueda servir de apoyo en el ejercicio diario de sus funciones; haciendo notar, que el protocolo en comento, ha sido opinado por las diversas instituciones que integran el grupo de trabajo en el ámbito local, así como con la aprobación del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel

**Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.**

OBJETIVO

Establecer lineamientos y procedimientos de actuación, en el marco de respeto a los derechos humanos, para que las instituciones de seguridad pública, hagan uso de la fuerza, solo cuando sea estrictamente necesario, de manera racional, congruente y oportuna, de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De este modo, se dará cumplimiento a los estándares de actuación contenidos en los instrumentos internacionales que refieren los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego.

En este sentido, el presente protocolo se constituye como una herramienta que puede ser aplicada sin ningún tipo de distinción por razón de nivel de organización jerárquica, rango o cargo en el ejercicio de la función, así como también, en la formación, capacitación y especialización policial.

Además de las reglas del uso de la fuerza, los integrantes de las instituciones de seguridad pública, deberán tener siempre presente que su actuación, incluso en el caso de legítima defensa, se encuentra regulada en cada uno de los códigos penales.

MARCO JURÍDICO

Leyes Federales

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Código Nacional de Procedimientos Penales.
3. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
4. Ley General de Víctimas.
5. Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
6. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
7. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
8. Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de la Violencia.
9. Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Instrumentos Internacionales

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. Convención Americana sobre Derechos Humanos.
4. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
5. Declaración para el reconocimiento de la competencia del comité contra la tortura de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
6. Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
7. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanas o Degradantes.
8. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer.
9. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

10. Jurisprudencia internacional en materia de Derechos Humanos, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
 - a) Sentencia contra Salvador , caso
 - b) Caracazo contra Venezuela.
 - c) Montero Araguere y otros contra Venezuela.
 - d) Sambrano Vélez y otros contra Ecuador.
11. Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
12. Principios Básicos sobre el empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Leyes Locales

1. Constitución Estatal y/o Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
2. Leyes relacionadas con la Seguridad Pública de los Estados e Instituciones policiales.
3. Ley Orgánica de la Procuraduría o Fiscalía del Estado.
4. Código Penal del Estado.
5. Ley de Uso de la Fuerza del Estado.

Otros instrumentos

1. Acuerdo A/04/2012 del Secretario de Seguridad Pública.
2. Manual de Uso de la Fuerza de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas.
3. Leyes que Regulan el Uso de la Fuerza de los cuerpos de seguridad pública.
4. Reglamentos Estatales de las Leyes que Regulan el Uso de la Fuerza.
5. Manuales de Uso de la Fuerza (federales o locales).
6. Diversas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
7. Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas.

ROLES

Son todas las actuaciones y medidas adoptadas por la policía, destinadas a asegurar, proteger y preservar el orden público, a partir del momento en que se tiene conocimiento de la comisión de un hecho que la ley señale como delito.

La policía que efectúa las detenciones por flagrancia, caso urgente, orden de aprehensión, entre otras, pueden ser de diferente nivel jerárquico y pertenecer a diferentes órdenes de gobierno (municipal, estatal, federal).

La policía deberá llevar a cabo las siguientes actividades:

1. Tener conocimiento de la posible comisión de un hecho delictivo, sea por llamado del centro de comunicaciones, ya sea por denuncia, cumplimiento a órdenes de comparecencia, aprehensión, u otras causas.
2. Llevar a cabo las detenciones en caso de flagrancia conforme a lo dispuesto por el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
3. Interrumpir el desarrollo del delito, evitando que llegue a consecuencias ulteriores.
4. Ejecutar las órdenes judiciales de aprehensión, presentación y comparecencia.
5. Ejecutar órdenes de detención en caso urgente.
6. Salvaguardar la integridad de las personas.
7. Agotar todos los medios no violentos disponibles para lograr su cometido.
8. Comunicar los motivos de la detención y los derechos que le asisten al detenido.
9. Efectuar la inspección corporal para verificar que el detenido no porte algún arma o instrumento con el que puedan causar o causarse daño.
10. Comunicar la detención a la central de mando de manera inmediata, de conformidad con el artículo 112 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
11. Trasladar al detenido a bordo de un auto patrulla de la corporación.
12. Elaborar el informe detallado describiendo el tiempo, modo y lugar en el que ocurrieron los hechos, con la mayor cantidad de información posible, de conformidad con el artículo 112 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

GLOSARIO

Denuncia. Noticia que da una persona de manera directa o anónima a la autoridad facultada para recibirla, de un hecho que posiblemente es contrario a la ley penal.

Detención. La restricción de la libertad de una persona por parte de la policía, con el fin de ponerla a disposición de la autoridad competente

Informe de uso de armas. Documento elaborado y redactado directamente por el policía en una acción donde se usaron armas de fuego. Deberá cumplir los requisitos establecidos en el punto informe.

La gravedad de una amenaza se determina por la magnitud de la agresión, sea individual o colectiva; la conducta por la cual la persona está siendo imputada, acusada o sentenciada; las características de su comportamiento ya conocidas, la posesión o no de armas o instrumentos para agredir y la resistencia u oposición que presente.

Legítima defensa. Oposición a una agresión, real, actual o inminente, sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, en el que no medie provocación dolosa suficiente y siempre que exista racionalidad de los medios empleados. La legítima defensa está regulada en cada Código Penal.

Lugar del hecho o hallazgo. Sitio en el que se ha cometido un hecho posiblemente delictivo o en el que se localizan o aportan indicios relacionados con el mismo.

Policía con capacidad para procesar. Integrante de las instituciones policiales que cuenten con capacidades para procesar el lugar.

Principio de Legalidad. Cuando su uso es desarrollado con apego a la normativa vigente y con respeto a los derechos humanos.

Principio de Oportunidad. Cuando la persona que debe someterse a la autoridad, se opone al mandato del Juez, el Ministerio Público o de otra autoridad, en el marco de las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes aplicables. Esto significa que debe procurarse en el momento y en el lugar en que se reduzcan al máximo los daños y afectaciones, tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas y sus bienes y en general, la afectación de los derechos de los habitantes.

Principio de Proporcionalidad. Cuando se utiliza en la magnitud, intensidad y duración necesarias para lograr el control de la situación, atendiendo al nivel de resistencia o de agresión que se enfrente. Se relaciona con la amenaza al bien jurídico tutelado y el nivel de fuerza utilizada para neutralizarla.

Principio de Racionalidad. Cuando su utilización es producto de una decisión en la que se valora el objetivo que se persigue, las circunstancias de la agresión, las características personales y capacidades tanto del sujeto a controlar como del policía; lo que implica que, dada la existencia del acto o intención hostil, es necesario la aplicación del uso de la fuerza por no poder recurrir a otro medio alternativo.

Resistencia agresiva grave. Conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas, empleando la violencia, el amago o la amenaza con armas o sin ellas para causar a otra u otras o al policía, lesiones graves o la muerte, negándose a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública o el Juez u otra autoridad, el cual previamente se ha identificado como tal.

Resistencia agresiva. Conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas, empleando la violencia, el amago o la amenaza, para negarse a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública o el Juez u otra autoridad, el cual previamente se ha identificado como tal.

Resistencia no agresiva. Conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas, exenta de violencia, para negarse a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por

personal de las Instituciones de Seguridad Pública o el Juez u otra autoridad, el cual previamente se ha identificado como tal.

Riesgo. Posibilidad o proximidad de que se produzca un perjuicio o daño.

Uso de la fuerza. Aplicación de técnicas, tácticas y métodos de sometimiento sobre las personas, de conformidad con el uso racional y los niveles respectivos de resistencia.

PROCEDIMIENTO

I. Concepto y Principios sobre el Uso Legítimo de la Fuerza

1. Concepto de Uso de la Fuerza.

Todo Estado, tiene la atribución de utilizar la fuerza para garantizar la seguridad de las personas y de los Derechos Humanos de quienes se encuentren en su territorio. Esto es particularmente obligatorio cuando la integridad física de las personas y sus bienes se encuentre amenazada. También puede legítimamente imponer sus leyes en el marco del respeto a los Derechos Humanos.

Debe subrayarse que las personas que se encuentran en el territorio de un estado tienen, de conformidad con el artículo 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no solo derechos si no deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad, por lo que sus derechos, están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Estas limitaciones deben ser establecidas conforme a leyes que se dicten por razones de interés general y aplicadas conforme al propósito para el cual han sido creadas.

El uso legítimo de la fuerza se aplica por medio de técnicas, tácticas, métodos, e instrumentos para que los agentes encargados de aplicar la ley, mantengan el orden, repelen o neutralicen actos de resistencia. El uso de la fuerza debe ser el estrictamente necesario, para alcanzar sus objetivos y por lo tanto, solo debe ser usada cuando los demás medios resulten insuficientes, rigiéndose por los principios de legalidad, oportunidad, proporcionalidad y racionalidad.

El artículo 21 Constitucional exige que las actuaciones de los elementos de las instituciones de seguridad pública sean profesionales, lo que implica que deben ser entrenados para saber cómo tomar decisiones, reaccionar ante los peligros, valorar los riesgos y afrontar las amenazas.

a) Niveles de resistencia

Para calcular los riesgos, afrontar las amenazas y reaccionar ante el peligro, es necesario establecer el nivel de resistencia de la persona que debe cumplir con la orden dada por el Ministerio Público, el Juez u otra Autoridad, de conformidad con los niveles de resistencia no agresiva, agresiva y agresiva grave.

b) Niveles del uso de la fuerza

Es la gradualidad del uso de la fuerza, que previa evaluación de la situación, debe adoptar la policía de manera proporcional a la conducta de la persona y/o la resistencia que opone, mediante:

Disuasión. Consiste en la simple presencia física.

Se materializa con la presencia visible de personal de la policía, donde se ha detectado un hecho que la ley señale como delito, que puede derivar en acciones ilícitas generadoras de daños mayores.

Persuasión. Las acciones que de manera inofensiva desarrollan las policías, mediante contacto visual e instrucciones verbales, para conminar al transgresor de la ley a que desista de su conducta.

Fuerza no letal. Se emplea para controlar a una persona o personas en los casos de resistencia no agresiva y agresiva.

El uso de instrumentos no letales tendrá como propósito causar el menor daño posible durante el control físico. No se deberá hacer uso de la fuerza excesiva, irracional y desproporcionada a la resistencia del transgresor o agresor.

Fuerza letal. Consiste en la utilización de medios letales (armas de fuego, contundentes e improvisadas) para proteger la vida propia, de terceros o en la defensa de bienes. Puede usarse fuerza letal cuando los agresores o transgresores amenacen al personal de las policías o a terceras personas, con arma de fuego, explosivos, vehículo u otro objeto que ponga en peligro la vida.

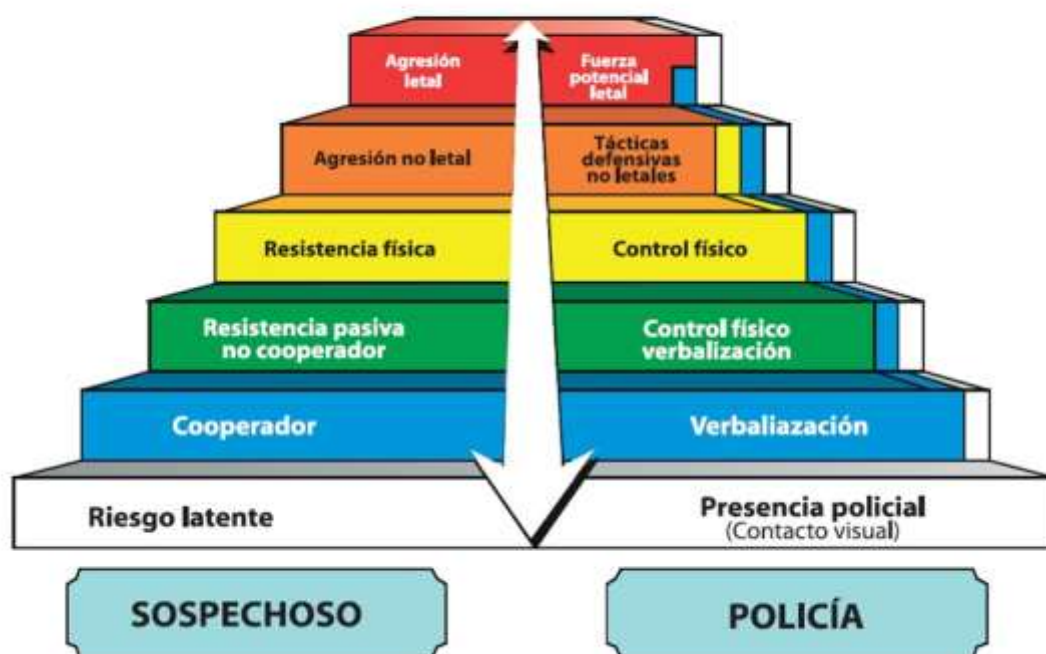
En el uso de la fuerza, se privilegiará la disuasión o persuasión sobre cualquier otro nivel, salvo que debido a las circunstancias de la situación particular que se viva, se pongan en riesgo la vida o la integridad física de terceros o del personal policial, en cuyo caso, estos últimos podrán implementar directamente el nivel de uso de la fuerza que sea necesario, en los términos de este protocolo.

No debe perderse de vista que las situaciones que requieren el empleo de la fuerza son dinámicas, que pueden pasar de un tipo de agresión a otro y por ello, el personal que está dentro de la misma debe tomar decisiones correctas aplicando los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad.

El personal de las policías que deban usar la Fuerza tendrán que evaluar la situación, planificar el nivel que empleará y actuar para controlarla; debe tener presente que toda situación es dinámica, las conductas de quienes infringen la ley pueden ir de una actitud cooperativa a presentar una resistencia grave en breve tiempo, sin que necesariamente tengan que pasar por las etapas de oponer una resistencia agresiva o no agresiva; la autoridad debe estar presente y mantener comunicación con la(s) persona(s) durante todo el acontecimiento; ante una resistencia no agresiva se debe emplear métodos disuasivos mismos que pueden convertirse en métodos persuasivos, empleo de la fuerza no letal y fuerza letal, dependiendo de la evolución de la conducta que se presente en el caso particular.

Nivel de uso de la fuerza	Por parte del agresor	Por parte del policial
Primer	Resistencia pasiva	Comandos verbales y/o disuasión
Segundo	Resistencia pasiva agravada	Reducción física de movimientos
Tercer	Resistencia violenta	Empleo de la fuerza No letal
Cuarto	Resistencia violenta agravada	Empleo de la fuerza letal

Modelo de uso de la fuerza



2. Uso indebido de la fuerza

Se da cuando la utilización del uso de la fuerza se realiza sin observar las reglas y los principios que contiene el presente instrumento. En todo caso, el personal de las policías que, haya tenido conocimiento de que se hizo uso indebido de la fuerza, lo denunciará ante la autoridad correspondiente.

a) Acciones que constituyen uso indebido de la fuerza

Las siguientes acciones se encuentran prohibidas por constituir un uso indebido de la fuerza:

1. Controlar a una persona con la aplicación de técnicas de defensa personal que restrinjan la respiración o la irrigación de sangre al cerebro.
2. Colocar a una persona esposada en una posición que restrinja su respiración.
3. Disparar desde o hacia vehículos en movimiento, excepto en legítima defensa y en aquellos casos en que, de no hacerlo, resulte evidente y notorio que el personal o terceros resultarán gravemente afectados y no hay otra alternativa para evitarlo.
4. Disparar a través de ventanas, puertas, paredes y otros obstáculos, hacia un objetivo que no esté plenamente identificado, salvo el caso de legítima defensa.
5. Disparar para controlar a personas que solamente se encuentran causando daños a objetos materiales, fuera de los casos de legítima defensa.
6. Disparar para neutralizar a personas cuyas acciones únicamente puedan producir lesiones o daños a sí mismas, fuera de los casos de legítima defensa.

Se debe recordar que:

1. El nivel de fuerza utilizado debe ser siempre proporcional a la gravedad de la resistencia y el objetivo legal que se pretenda alcanzar, procurando minimizar el daño o las lesiones al utilizarla.
2. Siempre que se decida utilizar la fuerza en cualquiera de sus niveles, debe hacerse conforme a lo que establece este protocolo.
3. Debe evaluarse siempre el nivel de resistencia y el total de circunstancias que rodean el incidente. A partir de esta evaluación se elegirá el nivel de fuerza que comenzará a aplicarse.
4. Si no obedece a cualquiera de las técnicas de persuasión, hará uso de la fuerza necesaria, acorde a la resistencia de la persona.
5. Si no existe una situación de peligro inminente, se debe advertir la intención de utilizar la fuerza y dar un tiempo razonable para permitir que la persona disminuya su resistencia.

6. A medida que se incrementa la resistencia por parte de la persona, se debe incrementar el nivel de fuerza necesario para superar esa resistencia.
7. Se debe reducir el nivel de fuerza cuando la persona reduce la resistencia.
8. Si la situación empeora o mejora, se debe estar preparado para reevaluar la situación y seleccionar el nivel de fuerza más apropiado.

III. Plan operativo de uso de la fuerza

Cuando exista tiempo suficiente para la planeación de una acción que pueda implicar el uso de la fuerza dentro de la aplicación de los procedimientos en el Sistema Procesal Acusatorio, tales como cateos, detenciones, traslados, investigaciones, etcétera, los elementos de las instituciones de Seguridad Pública deberán realizar un plan que comprenderá las siguientes acciones:

1. Determinación del mando responsable del operativo;
2. La estrategia necesaria para controlar una eventual resistencia;
3. El análisis del historial y otros factores de riesgo para la operación;
4. Los procedimientos para que las acciones policiales causen el menor daño posible a las personas;
5. La estrategia para repeler acciones violentas, como respuesta a la operación;
6. Las acciones secundarias para el reforzamiento de la seguridad y las garantías; y
7. Las demás operaciones policiales necesarias para restablecer la paz pública y la seguridad ciudadana en caso de resistencia violenta.

1. Informes sobre el uso de la fuerza

La Policía realizará un reporte pormenorizado a su superior jerárquico inmediato.

En caso de utilización de armas de fuego, se elaborará un reporte que contendrá:

1. Nombre, adscripción y datos de identificación del Policía;
2. Nivel de fuerza utilizado;

3. Circunstancias, hechos y razones que motivaron la decisión de emplear dicho nivel de fuerza;
4. En caso de haber utilizado armas letales:
 - a. Detallar las razones que se tuvieron para hacer uso legítimo del arma de fuego;
 - b. Identificar el número de disparos, y
 - c. Especificar las lesiones, las personas lesionadas y los daños materiales causados.

2. Autoridades a quien se dirigen las reglas del uso de la fuerza

1. La policía como primer respondiente, en función de la protección y preservación del lugar de los hechos, del hallazgo, en la detención en flagrancia en su caso o de la protección de la víctima, ofendido o testigos.
2. El policía encargado del cumplimiento de las órdenes judiciales de aprehensión y comparecencia, en los términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
3. El policía que interviene en las órdenes de comparecencia obligatoria de testigos en términos del artículo 364 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

3. Consideraciones en la limitación a la libertad personal

Los elementos de seguridad pública que realicen estas funciones deberán seguir los siguientes procedimientos:

1. Identificación
2. Notificación a la estación o base operativa
3. Lectura de derechos del detenido
4. Consideraciones especiales
 - a. Capacidad reducida del detenido
 - b. Poblaciones vulnerables
 - c. Situaciones extremas
 - d. Documentación.

El elemento de la policía que este ejerciendo su función oficial, deberá portar clara, abierta y visiblemente su identificación, esta identificación deberá incluir la agencia o dependencia para la cual trabaja, nombre (por lo menos el apellido) y el número de identificación. Salvo que por razones de seguridad y de conformidad con la autorización específica se establezca una excepción.

Al realizar una detención, el oficial debe de estar atento a la existencia y/o presencia de factores especiales que pueden afectar la capacidad física y/o mental del sujeto.

Por tanto, la capacidad limitada, puede reducir el entendimiento de la situación que ejerce el individuo; algunos de esos factores pueden ser:

1. Intoxicación y/o ebriedad
2. Discapacidad física
3. Discapacidad mental
4. Minoría de edad
5. No entendimiento del idioma.

Existe población que experimenta mayor vulnerabilidad y como consecuencia, exige mayor atención y cuidado por parte del interviniente. Entre dichas poblaciones, se encuentran:

1. Mujeres.
2. Indígenas.
3. Niñas, niños y adolescentes.
4. Migrantes.
5. Adultos mayores.
6. Personas que tengan orientación sexual del tipo Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual, y en general que por motivos de aquella, sufran discriminación por el núcleo poblacional en que convivan habitualmente por razones de empleo, estudios u otra.

4. Aspectos generales

En todas las operaciones que realiza la policía, deberá de tener conocimiento de la existencia de una situación en la que potencialmente se podría llegar a emplear la fuerza, en consecuencia deberán llevarse a cabo las acciones siguientes:

a) Notificación a la estación o base operativa

Cuando el policía realice una detención, de cumplimiento a una orden de aprehensión o comparecencia, si las condiciones lo permiten, deberá comunicar de forma previa dicha actuación a su central por medio de la radio. La notificación deberá de incluir lo siguiente:

1. Identificación del policía.
2. Intención de detener a un sujeto.
3. Breve descripción del sujeto.
4. Sitio o lugar de la detención.
5. La razón de la detención.

Una vez que se haya ejecutado la detención, el oficial deberá comunicar este hecho a la estación o base operativa en el primer momento en que la situación lo permita. Se procurará que se haga antes de comenzar el traslado de la persona detenida. Cuando no se realice la comunicación deberá justificarse este hecho.

b) Acciones previas

1. Se procurará contar con cámaras de videgrabación, fotográfica o instrumentos de grabación de sonido, para estar en condiciones de aportar medios de prueba fehacientes sobre la actuación del personal en operaciones, en caso de emergencia se podrá utilizar teléfonos inteligentes si están autorizados en su corporación.

2. Al inicio de cada operación, el encargado de la misma y de acuerdo con el plan aprobado deberá indicar las instrucciones sobre el uso de la fuerza, actividades a realizar, función específica que le corresponde a cada individuo que participara en la acción policial.
3. Ordenará al personal que evite mostrar actitudes agresivas o provocadoras.

c) Acciones posteriores

1. Observa y anota las características especiales del lugar de los hechos (aspecto físico general, materiales de construcción y detalles específicos), sin alterar las condiciones en que se encuentra.
2. Verifica si existen víctimas en el lugar de los hechos, en su caso proporciona el auxilio de manera personal o a través de la unidad de apoyo que corresponda.
3. Si las circunstancias del hecho lo ameritan, se deberá evacuar a las personas que se encuentren dentro del inmueble, y conducirá a las víctimas, ofendidos, probable responsable y testigos a un área fuera de riesgo.
4. Verifica las condiciones del lugar y establece el procedimiento a seguir. En caso de contratiempos meteorológicos, actúa para asegurar que no se pierdan los indicios que se encuentran en el lugar de los hechos.
5. Identifica posibles personas vinculadas a los hechos, en su caso, solicitar el apoyo a la corporación para organizar su búsqueda inmediata.
6. En caso de que el hecho delictivo se ubique al interior de un inmueble, solicita permiso para ingresar de ser posible, salvo que se trate de caso urgente o que esté en peligro la vida de las personas.

IV. Procedimientos específicos

1. Metodología ante la orden de aprehensión, por parte del o los elementos de la policía

1. El policía recibe el mandamiento judicial para cumplimentar la orden de aprehensión.

2. Se realiza el plan de operación que comprende las acciones operativas para su cumplimiento, valoración de riesgos sociales, riesgos policiales y riesgos patrimoniales, al igual que el diseño técnico y de inteligencia policial respectivo.

Respecto de las actuaciones específicas ante el cumplimiento de la orden de aprehensión se continúa con los supuestos:

Actividad desarrollar en la orden de cateo

El cateo de un lugar tiene protección especial, de conformidad con el artículo 16 de la constitución. El Ministerio Público de solicitar al Juez de control una orden de cateo en razón de que se hace necesario inspeccionar un lugar determinado, con la finalidad de aprehender a una persona o encontrar ciertos objetos, sin mediar autorización de la persona que legalmente pueda otorgarla. Se pueden presentar los siguientes supuestos:

1. Respecto al objetivo del cateo:
 - a) Detención de persona.
 - b) Búsqueda, localización y recolección de objetos.
2. Respecto al lugar:
 - a) Domicilio o una propiedad privada (artículo 282 del CNPP).
 - b) Residencia u oficina de cualquiera de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial de los tres órdenes de gobierno o en su caso, organismos constitucionales autónomos (artículo 286 del CNPP).

Respecto a Buques, embarcaciones, aeronaves o cualquier medio de transporte extranjero en territorio mexicano, se observarán las disposiciones previstas en los tratados, leyes y reglamentos aplicables.¹

¹En el caso que se tenga que abordar una embarcación extranjera, se seguirán las reglas de la Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar¹. De conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Marina ejerce la función de Policía Marítima¹. La autoridad local podrá ejercer las funciones de competencia auxiliar o caso urgente, así como los casos de salida de puertos fluviales o cualquier otro en que las embarcaciones hayan salido de territorio del estado y este haciendo una persecución.

En los casos de aeronaves, se seguirán las reglas del Derecho Internacional y las leyes federales, teniendo en cuenta en todo momento las reglas de competencia dispuestas en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 2 al 5 del Código Penal Federal. En estos casos la autoridad local deberá recordar que podrá ejercer las funciones de competencia auxiliar o caso urgente.

1. Actividades del ministerio Público

El Ministerio Público es el encargado de solicitar al juez la orden de cateo cuando a su consideración sea indispensable para la investigación, una vez solicitada, por cualquier medio, éste determinará a los servidores públicos que podrán intervenir en el cateo respectivo, como es el caso del policía y los peritos. Dependiendo del objeto del cateo se determinará si solo participarán policías o se requieran peritos. Una vez definido el personal a participar el Ministerio Público lo informará al juez de control para su autorización.

El Ministerio Público para la orden de cateo realiza las siguientes acciones:

1. Solicitud de orden de cateo, para lo cual deberá:
 - a) Elegir el medio idóneo para hacer la solicitud de orden de cateo al Juez de Control.
 - b) Hacer la solicitud por el medio elegido. (teléfono, correo electrónico, audiencia).
 - c) En caso de solicitar audiencia para solicitar la orden, agendar la cita y acudir a ésta con la información necesaria para sustentar la solicitud.

Con independencia del medio por el cual se haga, debe contener, atendiendo a cada supuesto en específico, por lo menos lo siguiente:

- a) La determinación concreta del domicilio o propiedad privada que habrán de ser cateados.
- a) El objetivo del cateo.
- b) Persona o personas que hayan de aprehenderse.- Para ello el Ministerio Público explicará cómo identificó e individualizó a éstas, argumentando la relación que guarda con el delito investigado.
- c) Objetos, indicios o instrumentos del delito que se pretenden buscar, localizar, recolectar y/o asegurar.-El ministerio Público explicará la relación de éstos con la investigación, respecto de los cuales se debe de precisar sus características conocidas.
- d) El motivo del cateo. Se refiere a expresar detalladamente los motivos y razones por las cuales se concluye que en el lugar a catear es posible encontrar a la persona a aprehender o los objetos, indicios o instrumentos del delito relacionados con la investigación.

Si el Juez resuelve negativamente la solicitud, el Ministerio Público podrá interponer el recurso de apelación. Por cuanto hace a los actos de inspección a que se refiere el artículo 267 del CNPP, los mismos fueron debidamente atendidos en el protocolo de Protocolo actos de investigación que no requiere control judicial. Si el juez resuelve positivamente es donde entra la función del policía con un uso racional de la fuerza.

2. Actuación del policía en el cateo

1. Recibir la autorización judicial y verificar:
 - a. Que se encuentre dentro del plazo legal;
 - b. Fecha, hora y lugar del cateo;
 - c. Nombres de las personas autorizadas para intervenir;
 - d. La determinación concreta del lugar o lugares que habrán de catearse y los límites de la búsqueda.
2. Elaborar el plan de acción para realizar el cateo. Este plan, deberá ser realizado por el responsable policial del operativo, y autorizado por el Ministerio Público responsable del cateo, y tomará en cuenta los siguientes aspectos, además de los señalados en el capítulo del plan:
 - a. Ubicar inequívocamente el lugar de intervención.
 - b. Determinar las rutas de acceso y salida posibles del lugar.
 - c. Elegir la ruta de arribo y salida del lugar de acuerdo al plan de ejecución.
 - d. Analizar el entorno: Riesgo de la zona geográfica, condiciones ambientales, tipo de delito. o Integrar de los equipos de trabajo.
 - e. Determinar el equipamiento para el cateo: materiales y equipo de protección personal.
 - f. Elegir el medio de transporte.
 - g. Coordinarse con otras corporaciones policiales o de las fuerzas armadas y personal especializado.
 - h. Asignar roles para la ejecución del plan.
 - i. Elegir el momento conveniente de ejecución dentro del plazo autorizado.
3. Arribo al sitio de intervención
 - a. Corroborar el lugar de intervención.

- b. Ejecutar el plan de seguridad.
 - c. Identificar y controlar riesgos y/o amenazas.
 - d. Detener personas en caso de flagrancia.
4. En el lugar de intervención se deberá
- a. Garantizar la existencia y permanencia del orden público y privado.
 - b. Identificarse como policía.
 - c. Anunciar el cateo cuando las condiciones de seguridad lo permitan.
 - d. Entregar a persona mayor de edad que se encuentre o fijar en un lugar visible una copia de los puntos resolutivos de la orden de cateo.
 - e. Informar el derecho del ocupante a proponer dos testigos para que acompañen el desarrollo del cateo, en su caso, proponer dos testigos que no figuren en la orden, mismos que estarán obligados a firmar el acta circunstanciada de cateo.
 - f. Ingresar de acuerdo con el plan de acción.
 - g. Identificar y controlar riesgos y amenazas.
 - h. Si se advierte la comisión de un delito en flagrancia o se identifica a la persona que ha de aprehenderse, actuar conforme a este protocolo y al protocolo de detención.

2. Seguridad en la Sala de Audiencia

La policía procesal, quien se encuentra encargado de garantizar la seguridad y vigilancia de las Salas de Audiencia, actuará siempre bajo las instrucciones del órgano Jurisdiccional, y en casos excepcionales, cuando identifique que una persona, está dentro de la salas de audiencias sin respetar las reglas de orden, se procederá a requerirlo a que guarde la compostura y de no hacerlo, se le conminara para que abandone la sala, o bien será desalojado por la propia policía procesal.

Si la persona representa un peligro mayor por una conducta agresiva, podrá utilizar las reglas ubicadas en el apartado de niveles de uso de la fuerza.

Si la persona amenaza a otras personas o sus bienes se aplicaran las reglas de la legítima defensa.

3. Traslados de detenido

Cuando la policía someta a una persona, está obligado a asegurarla de inmediato. En el aseguramiento y traslado respectivo ante la autoridad competente, la policía podrá utilizar las esposas o candados de mano. En todo caso, deberá asegurarse a la persona con el menor daño posible a su integridad física y con respeto a su dignidad. Para el uso de esposas o candados de mano la Policía deberá:

1. Deberán ser usadas exclusivamente en los traslados para la seguridad de la persona y terceros.
2. Cerciorarse de que no ejerzan presión innecesaria sobre la persona;
3. Abstenerse de usar fuerza física o cualquier otro medio de coerción sobre la persona inmovilizada;
4. Por ningún motivo se debe esposar a la persona detenida a alguna parte de tu vehículo durante el traslado.
5. Utilizarlas durante el tiempo estrictamente necesario, retirándolas inmediatamente a la puesta a disposición de la autoridad competente.
6. Se debe esposar a la persona detenida con las manos por la espalda y las palmas extendidas hacia afuera. Sólo se puede esposar a alguien con las manos al frente cuando tenga alguna discapacidad, cuando las manos por la espalda puedan agravar alguna lesión o cuando se presuma que una mujer detenida se encuentre embarazada.

En caso de que durante el traslado se establezca una situación de amenaza a personas o bienes se utilizarán las reglas de legítima defensa.

4. Medidas Cautelares

Cuando se imponga una medida cautelar, la autoridad de supervisión solicitará el auxilio de la autoridad de seguridad pública correspondiente con el fin de hacer cumplir la medida.

Esta autoridad realizará el plan operativo de uso de la fuerza, y verificará que sus elementos y los de la autoridad de seguridad pública conminen a la persona sujeta a la medida cautelar a que de manera voluntaria cumplir la determinación judicial, y en caso de que persista la negativa utilizará los diversos niveles del uso de la fuerza.

Procedimiento de Embargo en caso de medidas cautelares reales

El procedimiento de embargo comprende dos momentos fundamentales:

1. El auto que ordena el embargo, y
2. La diligencia de embargo.

El auto que ordena el embargo se dicta por el Juez como una medida provisional, cuyos efectos quedan supeditados a los que se resuelvan en la sentencia.

Diligencia de Embargo

Para llevar a cabo la providencia precautoria de embargo, se seguirá en lo conducente las reglas generales de dicha figura previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales. En materia de uso de la fuerza se seguirá lo siguiente

1. Cuando el deudor no se encuentre en su domicilio, se le dejará un citatorio.
2. Se fijará la visita dentro de las 24 horas siguientes y, si no se espera, se practicará la diligencia con cualquier persona que esté en la casa a falta de ella con el vecino inmediato.
3. Si a la hora fijada para realizar la diligencia previa notificación, la persona contra quien se tiene que ejecutar no se encuentra en el domicilio o se niega a recibir o se resiste al mandato judicial, y el juez autorizó el rompimiento de cerraduras, se le conminará a la persona a respetar el mandato judicial y en caso contrario se romperán las mismas buscando el menor daño posible a los bienes.
4. Después de que sean designados los bienes de conformidad con las reglas establecidas, se le conminará a la persona para que los entregue. En caso contrario se utilizará la fuerza de la manera proporcional establecida en el apartado de niveles del uso de la fuerza.

V. Responsabilidades

El uso indebido de la fuerza, genera responsabilidad penal y administrativa para la policía, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás normativa vigente en las entidades federativas; además debe recordarse que no solamente está comprometida la responsabilidad del servidor público, sino la de su corporación y podría implicar responsabilidad para el Estado Mexicano en el ámbito internacional.

No se podrá argumentar el cumplimiento de una orden, si se tiene conocimiento que es ilícita y tuvo la oportunidad razonable de negarse a cumplirla.

Incurre en responsabilidad el superior que ordene el uso indebido de la fuerza o que teniendo conocimiento de que sus subordinados incurrieron en dicha conducta, no haya adoptado las medidas a su disposición para impedir o denunciar ese hecho ante la autoridad competente.

1. Responsabilidades específicas

a) Obligaciones de los mandos.

1. Emitir órdenes verbales o escritas de manera clara, concisa, completa, oportuna y que tengan relación con actos del servicio.
2. Analizar y evaluar la situación para determinar el nivel del uso de la fuerza que se aplicará dependiendo del nivel de la resistencia de la o las personas.
3. Evitar dar órdenes que impliquen el uso indebido de la fuerza.
4. Concebir, preparar y conducir las actividades a desarrollar, tomando las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de las personas ajenas a los hechos.
5. Prever que el personal bajo su mando, en actividades de apoyo a las autoridades civiles, cuente con el armamento, equipo, adiestramiento y demás medios necesarios y autorizados para poder emplear el uso de la fuerza.

b) Acciones u omisiones que dan lugar a la determinación de responsabilidad legal para los mandos.

1. Tener conocimiento que personal bajo su mando hará uso indebido de la fuerza y contando con los medios necesarios para evitarlo, no lo impida.
2. Ordenar el uso de la fuerza letal, fuera de los casos de legítima defensa.
3. Omitir verificar que el uso de la fuerza sea justificada aplicando los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad.
4. Omitir rendir los informes correspondientes de manera inmediata al escalón superior, en todos los casos donde su personal haga uso de armas de fuego, de conformidad con el apartado de informes sobre el uso de la fuerza.